

Berron Barret, Vicente Perez, Francisco Zetina, José del R. Perez, José de la Luz Perez y Seferino Escalante, como escrutadores en uno de los colegios electorales de aquel partido, para la eleccion de diputados al Congreso del Estado, contra los actos del juzgado de lo criminal, en virtud de los que han sido declarados bien presos despues del término señalado por la Constitucion avocándose el conocimiento de la causa que asientan los quejosos ser de la competencia del juzgado de Distrito de aquel Estado. Vistas las constancias de autos y considerando: que en cuanto á la primera parte de la demanda, no existe ya la violacion por haberse pronunciado el auto de bien presos, por el juzgado de lo criminal, no quedando para el caso de haberse dado el referido auto fuera del término Constitucional, sino el recurso de responsabilidad. Considerando: en cuanto á la segunda parte, que por los datos presentados por los quejosos no hay motivo para poner en duda la jurisdiccion del juez de lo criminal no siendo además del presente juicio el conocimiento de ese recurso indicado por los quejosos en su escrito de demanda, sin que los actos del juzgado contra quien se solicita el amparo, importen hasta ahora violacion alguna de las garantías que otorgan los artículos 16, 17 y 19 de la carta federal. Con tales fundamentos se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el juzgado de Distrito de Campeche en la parte que resuelve no haber lugar al amparo solicitado.

Devuélvanso sus actuaciones al juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el To- ca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—

Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José Artcaga.—P. Ordaz.—Ignacio Ramirez.—M. Auza.—S. Guzman.—L. Velasquez.—M. Zavala.—José García Ramirez.—Luis María Aguilár.—secretario.

Son copias. México, Agosto ocho de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta.*—oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Campeche por el C. Tomás Lopez, contra el tribunal superior del Estado, por violacion de la garantía consignada en el artículo 24 de la Constitucion.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: Al ver nuevamente estas diligencias de amparo promovidas por Tomás Lopez, vecino de Mamantol, advierto que los fundamentos que los HIL. tribunales reunidos del Estado tuvieron para declarar nulo el veredicto de inculpabilidad que pronunció el ayuntamiento del Carmen en la causa que por abuso de autoridad se sigue al mencionado Lopez, consisten:

Primero; en no haberse sujetado para hacer dicha declaracion á la ley propia de estos casos, que es el reglamento interior del Congreso del Estado, y

Segundo; en la falta de citacion del acusador, cuya falta importa la nulidad de todo juicio. Por parte del quejoso, los fundamentos de su peticion estriban: en que habiendo sido juzgado y declarado sin culpa, hacer una misma declaracion sobre el mismo punto equivale á juzgarlo otra vez, lo cual es una infraccion notoria y flagrante del artículo 24 de la Constitucion federal, que le acuerda la garantía de no poder ser juzgado dos veces por un mismo delito.

Si observáramos con ligereza este asun-

to, tal vez nos inclinariámos á dictaminar conforme con los descos del peticionario, porque en efecto, hay una apariencia de razon en su queja, que hasta cierto punto parece persuadir de que se le va á juzgar dos veces, siendo este motivo mas que suficiente para decretar un amparo. Pero si con alguna reflexion observamos el informe justificado de los tribunales, emitido desde que se les pidió informe simple para resolver sobre la suspension, forzosamente se tendrá que convenir en que éstos han procedido con arreglo á derecho, anulando el *veredicto* que declaró inculpable á Lopez, y que por lo tanto no cabe el amparo solicitado. No pueden en verdad faltar á los preceptos de la justicia y atacar así una garantía individual, los que con facultades legales para modificar, variar y aun anular todo aquello que no estuviere arreglado á las fórmulas judiciales, han anulado al *veredicto* de un ayuntamiento, dictado con sujecion á una ley que no es la mandada observar para casos como el que nos ocupa: no hacerlo así, seria permitir que todos los juicios fueran seguidos y fallados con arreglo á la primera ley ó código extraño que se le viniera á la mano al juez, lo cual es jurídica y humanamente imposible. Tampoco puede reputarse malicioso y atentatorio el procedimiento de los tribunales, al ver así mismo que fué aconsejado por la falta de citacion del acusador de Lopez, cuyo requisito cuando no existe, es doctrina comun y corriente que ocasiona la nulidad del fallo que se pronuncie.

Por último, y si como observan tambien los propios tribunales, se atiende á que el amparo que se solicita versa sobre un negocio judicial, en que segun el art. 8º de la ley de 20 de Enero de 1869 no es permitido, acabamos por ratificarnos en su negativa.

Estas son las observaciones que cree justo hacer el infrascrito, las que bien desarrolladas en el informe antes aludido, releva al infrascrito de entrar en otros pormeno-

res, y concluye pidiendo, fundado en dicha consideracion, que se deniegue el amparo solicitado por D. Tomás Lopez, sin imponerle la multa de que habla la ley, porque á mi juicio no hay malicia alguna en su solicitud.

Campeche, Abril veintiuno de mil ochocientos setenta y uno. (Firmado.)—José Gomez.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Campeche, Abril veintisiete de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este juicio con todas sus constancias, y entre ellas el informe de los tribunales superiores de justicia del Estado y el último pedimento fiscal, sin incluir la citacion para sentencia del quejoso, porque este renunció en su ocurso, fojas una á dos frente, todos sus derechos, autorizando al juzgado expresamente para proceder sin su audiencia; y

Considerando: que este Juzgado para ser consecuente con las prescripciones constitucionales, debió admitir el escrito del actor en que pidió el amparo, á pesar de lo que previene el art. 8º de la ley relativa reglamentaria de los artículos 101 y 102 de la Constitucion que prohíbe la admision del amparo en negocios judiciales.

Considerando: que segun el informe citado de los tribunales, estos obraron en la esfera de sus atribuciones legales al declarar nulo el *veredicto* del jurado del Carmen que absolvió de culpa al quejoso por no haberse observado en su formacion la ley reglamentaria del gobierno interior del congreso del Estado, mandada observar por órden de seis de Octubre de mil ochocientos sesenta y tres, y por haberse celebrado la vista del jurado sin previa citacion de la parte acusadora.

Considerando: que no habiendo aducido el quejoso prueba en contrario sobre los hechos referidos en el anterior considerando,

estos son evidentes, y por tanto no se ha infringido el artículo veinticuatro de la Constitución que cita en su ocurno, puesto que no ha sido juzgado sino una sola vez por su delito, por haberse declarado nulo el primer juicio.

Considerando finalmente: que la concesión del amparo es caso de responsabilidad, según el artículo veinticinco de la ley respectiva y en el presente no hay razón para decretarlo por no aparecer violación de las garantías individuales; con cuanto mas considerar y tener presente convino y con fundamento de la citada ley, el Juzgado falla.

Primero; la justicia de la Unión no ampara ni protege al C. Tomás López contra la resolución de los tribunales reunidos del Estado, que dispuso fuera vista su causa por un nuevo jurado de hecho.

Segundo; no se impone al quejoso la multa de que trata el artículo diez y seis de la ley, por su notoria insolvencia.

Tercero; de conformidad con el artículo veintisiete de la propia ley, publíquese este fallo en el periódico oficial del gobierno del Estado. Hágase saber, dirigiéndose oficio con inserción de este auto al C. Juez de primera instancia del Partido del Cármon para que se sirva mandarlo notificar al interesado y elévense estos autos á la Suprema Corte de Justicia para su revisión. Así lo proveyó y firmó el C. Lic. Pedro Montalvo, Juez de Distrito de este Estado. Doy fé. (Firmados.)—*Pedro Montalvo.*—Ante mí.—*Francisco Campos.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Agosto dos de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Campeche, por el C. Tomás López, contra el Tribunal superior del Estado, que declaró nulo el veredicto pronunciado por el jurado del Cár-

men el 24 de Noviembre del año próximo pasado, que declaró no ser culpable al quejoso en la acusación que le hizo el C. Nicolás Flota; Considerando: que declarada la nulidad de un juicio éste se tiene como si no hubiese sido, por lo que la formación de otro, sobre el mismo punto, no puede decirse que importa positivamente la formación de dos juicios, que por lo mismo la declaración de la nulidad del veredicto pronunciado, el 24 de Noviembre citado, por el jurado reunido en el Cármen, y la formación de otro jurado para conocer de la acusación hecha por Flota contra López, no equivalen á juzgar dos veces acerca de un mismo delito; y que por consiguiente no se ataca la garantía consignada en el art. 24 de la Constitución federal; y considerando, además, que según se refiere en el expediente, López es notoriamente pobre, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada el 27 de Abril último, por el juez de Distrito de Campeche, que declara en primer lugar, que la justicia de la Unión no ampara ni protege al C. Tomás López, contra la resolución de los tribunales reunidos del Estado que dispuso fuera vista su causa por un nuevo jurado de hecho; y en segundo, que no se impone al quejoso la multa de que trata el art. 16 de la ley por su notoria insolvencia.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafraqua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Son copias. México, Agosto ocho de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro por el C. Manuel Díaz Domínguez, contra el Juez de letras de San Juan del Río por violación de los artículos 12, 13, 14, 16, 17 y 33 de la Constitución federal.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que cuando contestó el traslado que de este expediente se le corrió con fecha 5 del actual, se limitó á oponerse á la suspensión del acto reclamado por no creerla urgente. Creyó así mismo que no debía ocuparse de la cuestión bajo el punto de vista que ofrece el artículo 8º de la ley de 20 de Enero de 1869; porque para este efecto, no hay artículo en esa disposición que mande se oiga previamente al ministerio público. Así pues, es de la exclusiva responsabilidad del Juez la administración ó no administración del recurso de amparo, como se deduce del art. 25 de la referida ley.

Esta previene en el mencionado artículo 8º que no se admita el recurso de amparo en negocios judiciales. Y siendo indudablemente de este carácter el asunto actual, no debió sino desecharse el recurso interpuesto en cumplimiento de la ley.

Mas supuesto que el juzgado tuvo á bien admitirlo en virtud de su amplia jurisdicción para conocer de leyes ó actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales, según está mandado en los artículos 101 y 102 de la Constitución federal: el que suscribe pasa á evacuar el traslado de que habla el art. 9 de la ley de 20 de Enero tantas veces citada.

El Lic. Manuel Díaz Domínguez arrendatario de la hacienda de la Cueva, fué embargado en virtud de mandamiento expedido por el C. Juez de San Juan del Río, por deuda del español D. Juan Pardo, dueño de la misma finca; siendo acreedor de éste el fisco del Estado por la cantidad de dos mil novecientos pesos, desde el año de 1864 por valor de alcabalas causadas por la venta de la finca que fué embargada desde el mes de Julio de 1866. Pardo interpuso recursos y excepciones, fué condenado al pago por el juez de 1ª instancia de San Juan del Río, cuyo fallo causó ejecutoria, por haber sido confirmado por el Tribunal superior del Estado. Los autos siguieron sus trámites y la hacienda de la Cueva puesta en asta pública, habiéndose dado el último pregon en calidad de remate el día 21 de Noviembre del año próximo pasado. Así las cosas, fué mejorada la ejecución por falta de postores, en bienes del arrendatario que se encontraba en la finca.

El quejoso cree violadas en su persona las garantías que otorgan los artículos 33 sección 3ª, 12, 13, 14 y 16 de la Constitución general. El primeramente citado, no tiene aplicación al caso presente; pues el actor supone que se le ha concedido á Pardo la facultad económico coactiva; lo que no está probado.

El doce declara que en el país no puede haber prerrogativas, ni honores hereditarios, ni títulos de nobleza: cosas que acaso tendrá Pardo en el lugar de su origen, pero que no se le reconocen, ni se le han reconocido en la República por haber embargado al C. Díaz Domínguez, como este lo pretende.

El art. 13 garantiza que nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ni por tribunales especiales. Juzgar contra la ley por torpeza, ignorancia ó malicia, no es juzgar por leyes privativas ni es tribunal especial: un juzgado común. Ni el embargo importa una condenación ni el juez puede declara-